

# El conflicto de la UNAM: una historia inconclusa

Por Pablo González Casanova\*

**D**

El 20 de abril de 1999 el Consejo General de Huelga decretó el paro en la UNAM en repudio al aumento de cuotas que aprobó en una sesión el Consejo Universitario. La sesión se celebró fuera del recinto habitual y con la ausencia de varios consejeros que se quejarían de haber sido desinformados sobre el lugar y hora en que debían reunirse. 28 de ellos protestaron en documento firmado “porque se violó el derecho a discutir sobre los puntos de la convocatoria, y pusieron en tela de juicio la legalidad de los acuerdos”. El aumento de cuotas acabó con el carácter “casi” gratuito de una Universidad cuya colegiatura era de “veinte centavos” en pesos reales de 1966,<sup>1</sup> equivalente a dos centavos de dólar. La nueva colegiatura para estudios profesionales se fijó en 1360 pesos nominales (equivalentes a 120 dólares anuales), suma que las autoridades consideraban muy modesta, y que imponían con lo que creyeron un paliativo: que los aumentos no se aplicarían a quienes ya estuvieran estudiando en la universidad, sino nada más a los que en el futuro se inscribieran en ella.

En su lógica pragmática, las autoridades no concibieron las inmensas repercusiones que tendría la pérdida de legitimidad proveniente de una votación que gran parte de la comunidad universitaria calificaría de manipulada. No imaginaron tampoco la resistencia gigantesca y tenaz a que se enfrentaría un aumento que ellas consideraban bajísimo en comparación con los “estándares” de Estados Unidos y muchos otros países. No pensaron que la “opción racional” de quienes ya eran estudiantes de la Universidad consistiría en identificarse con quienes todavía no lo eran. La lógica pragmática de las autoridades no funcionó. A pocos días, miles de estudiantes se apoderaron de los distintos campus y escuelas de una de las más grandes universidades del mundo. Se quedaron en ellos 297 días, hasta que el 6 de febrero del siguiente año, aproximadamente 2500 policías entrenados como fuerza especial por los militares tomaron ciudad universitaria, sin que se reportara ningún muerto o herido.

La revuelta de los estudiantes de la UNAM tuvo una fase de ascenso en que obtuvieron innumerables concesiones de las autoridades empezando por una propuesta del Rector en la que éste dio marcha atrás y aceptó que las cuotas tuvieran carácter voluntario: el Consejo General de Huelga consideró la oferta engañosa y limitada, pues aparte de no declarar expresamente la gratuidad de la enseñanza no atendía una serie de

peticiones que dieran garantías a los estudiantes acusados, y que resolvieran los graves problemas de la educación superior en materia de democratización, cobertura y gratuidad. Muchas instancias mediadoras fallaron, algunas de antiguos dirigentes estudiantiles hoy miembros del PRD (Partido de la Revolución Democrática), otras de profesores eméritos apoyados por una parte importante de sus colegas y de la comunidad universitaria. El rector se vio obligado a hacer una nueva concesión: aceptar un diálogo directo y público, que originalmente había rechazado, con transmisión de las sesiones por Radio Universidad. El diálogo mostró enormes dificultades para avanzar. Los representantes de las autoridades se presentaron sin propuestas que significaran un cambio de políticas concretas. En cuanto a los delegados estudiantiles eran relevados de una sesión a otra y no sólo se engolosinaban en el uso de la palabra, sino aprovechaban el micrófono para dirigirse a los radioescuchas más que a los mensajeros de la rectoría. Es más, de manera casi natural los estudiantes representaron el teatro político que habían aprendido de sus mayores, y en su comportamiento mostraron desplantes y gestos de soberbia que parecían excesivos hasta para algunos de sus más radicales simpatizantes. El Rector pasó a la ofensiva y amenazó con usar “la fuerza de la ley”. Pronto lo apoyó el Presidente de la República quien lanzó un ultimátum a los estudiantes para que reabrieran la universidad. Sin embargo el movimiento contra el uso de la llamada “violencia legal” logró imponerse. Presidente y Rector se vieron en la necesidad de convocar nuevamente a una solución dialogada. Las fuerzas de derecha más agresivas se sintieron burladas, y calmarlas resultó imposible para el propio Rector a quien llegaron a faltarle al respeto. Al mismo tiempo los avances del diálogo parecieron pobrísimos y todo derivó en la renuncia y sustitución del rector. El ministro de salud, antiguo director de la Facultad de Medicina, abandonó el cargo que ocupaba y pasó a la Rectoría. La Junta de Go-



democrática, otras de profesores eméritos apoyados por una parte importante de sus colegas y de la comunidad universitaria. El rector se vio obligado a hacer una nueva concesión: aceptar un diálogo directo y público, que originalmente había rechazado, con transmisión de las sesiones por Radio Universidad. El diálogo mostró enormes dificultades para avanzar. Los representantes de las autoridades se presentaron sin propuestas que significaran un cambio de políticas concretas. En cuanto a los delegados estudiantiles eran relevados de una sesión a otra y no sólo se engolosinaban en el uso de la palabra, sino aprovechaban el micrófono para dirigirse a los radioescuchas más que a los mensajeros de la rectoría. Es más, de manera casi natural los estudiantes representaron el teatro político que habían aprendido de sus mayores, y en su comportamiento mostraron desplantes y gestos de soberbia que parecían excesivos hasta para algunos de sus más radicales simpatizantes. El Rector pasó a la ofensiva y amenazó con usar “la fuerza de la ley”. Pronto lo apoyó el Presidente de la República quien lanzó un ultimátum a los estudiantes para que reabrieran la universidad. Sin embargo el movimiento contra el uso de la llamada “violencia legal” logró imponerse. Presidente y Rector se vieron en la necesidad de convocar nuevamente a una solución dialogada. Las fuerzas de derecha más agresivas se sintieron burladas, y calmarlas resultó imposible para el propio Rector a quien llegaron a faltarle al respeto. Al mismo tiempo los avances del diálogo parecieron pobrísimos y todo derivó en la renuncia y sustitución del rector. El ministro de salud, antiguo director de la Facultad de Medicina, abandonó el cargo que ocupaba y pasó a la Rectoría. La Junta de Go-

bierno de la Universidad no tardó ni una semana en nombrarlo con el argumento de que era muy peligroso dejar un largo tiempo a la Universidad sin Rector. Los estudiantes consideraron la rapidez de la Junta como una prueba más de su falta de autonomía: y que el elegido era “el rector del Presidente”; sólo parecieron reconocer que era un político más avezado que el anterior.

Durante ese tiempo se habían agudizado una serie de luchas en el seno del Consejo General de Huelga y también en el de las autoridades universitarias y sus órganos colegiados. En cada parte las luchas internas se daban entre moderados y duros. En el CGH se distinguían las categorías de “los moderados” y “los ultras”. Entre las autoridades había algunas corrientes más inclinadas a la negociación y otras que insistían, con distintos tonos y argumentos, en el uso de la “fuerza legal” y en “la recuperación del estado de derecho”. Enfrentamientos y acercamientos entre las dos partes daban un carácter irregular al conflicto, con vaivenes de aliento y desaliento, con momentos en que predominaba la negociación y otros en que la represión cobraba la delantera, todo entre variantes contradictorias en cuanto al uso de la persuasión, la intimidación, el reproche o la sanción.

Desde los inicios del conflicto éste se fue complicando. La llamada comunidad universitaria se dividió entre los partidarios del rector y los del Consejo General de Huelga. Aunque pronto aparecieron grupos de mediación y algunos de ellos lograron cierto apoyo, todos los aspirantes a mediadores sufrieron embates que anularon finalmente sus esfuerzos. El conflicto también se complicó por ser un año de elecciones para la Presidencia de la República y para el Congreso de la Unión. El partido oficial, el de centro derecha y el de centro izquierda lanzaron acusaciones contra sus respectivos opositores. Los acusaron de querer manipular la universidad para ganarse a los estudiantes, o de buscar que estuviera cerrada hasta después del dos de julio, una vez que se hubiera decidido la sucesión. Las acusaciones se volvieron más agrias, al ser Cuauhtémoc Cárdenas candidato de la izquierda a la presidencia y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y al enfrentarlo sus críticos al dilema de tolerar el desorden de manifestaciones y marchas que cerraban calles, avenidas y plazas, o de usar la fuerza pública para poner un alto a los desmanes, en cuyo caso se ganaría el resentimiento de sus propios partidarios, lo que de hecho ocurrió con una intervención policíaca en la que numerosos huelguistas fueron humillados.

Entre otros actores muy importantes que entraron en escena se encontraron las organizaciones patronales que llegaron a exigir hasta el cierre de la UNAM, así como núcleos considerables de la clase media alta que hicieron manifestaciones de automóviles con luces encendidas y zumbidos de bocinas, y a

los que acompañaron damas o “mujeres vestidas de blanco” y abogados celeberrimos. Frente a todos ellos marcharon y se manifestaron varias organizaciones de pobladores urbanos, de movimientos populares y de sindicatos obreros, con no pocos padres de familia que habían sido huelguistas en 1968 y que tenían a sus hijos entre los paristas del ‘99.

Los medios electrónicos se apoderaron de la escena; con la gran prensa empezaron a tomar iniciativas para participar en la construcción del conflicto real a través de noticias, comentarios e imágenes que lo animaban.

Los gobernantes de carne y hueso tuvieron su parte. Las declaraciones del presidente Zedillo y de otros altos funcionarios, ora amenazadoras, ora conciliadoras, a menudo se interpretaron en relación con los proyectos privatizadores de la educación y la electricidad, y llevaron a reparar en los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que en declaraciones sucesivas exigían al gobierno acelerar el paso en la privatización de la industria eléctrica.

El empleo de grupos de choque (acusados de “porros”), el de servicios de espionaje (acusados de “orejas”) y el de “agentes provocadores” (disfrazados de “ultras”) fue motivo de múltiples enojos entre los paristas, mientras la presencia de agentes de las organizaciones rebeldes del Ejército Popu-

lar Revolucionario y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue denunciada por los partidarios de las autoridades o por las autoridades mismas. A la gran variedad de actores y de luchas se añadieron cambios continuos en los enfrentamientos y los acercamientos. El uso del diálogo y la búsqueda de consensos pa-

recieron siempre encontrar obstáculos insuperables.

El nuevo rector inició un proceso de conciliación en el que involucró no sólo a los directores, sino al Consejo Universitario, a los profesores, los estudiantes y el personal administrativo. Su meta pareció consistir en convencerlos que el único camino para la solución era dialogar, conceder todo lo que no afectara los valores académicos y aceptar la necesidad de una profunda reforma universitaria. Al mismo tiempo, el nuevo rector reactivó el diálogo con el CGH y preparó un plebiscito en el que también participara el estudiantado, el profesorado y el personal administrativo. En el plebiscito una altísima proporción de los universitarios –sobre todo del personal académico– aprobó el fin de la huelga así como las propuestas de rectoría para derogar el reglamento que había aumentado las cuotas, para suspender las relaciones de la UNAM con un instituto extrauniversitario encargado de realizar los exámenes de admisión, para organizar un programa de regularización de cursos y para realizar un congreso universitario que decidiera sobre otras demandas, incluida la

**“Entre otros actores muy importantes que entraron en escena se encontraron las organizaciones patronales que llegaron a exigir hasta el cierre de la UNAM, así como núcleos considerables de la clase media alta que hicieron manifestaciones de automóviles con luces encendidas y zumbidos de bocinas, y a los que acompañaron damas o “mujeres vestidas de blanco” y abogados celeberrimos.”**

reestructuración de la UNAM. La propuesta del rector -convalecida por el Consejo Universitario- hacía suyo el compromiso de retirar las acusaciones contra estudiantes paristas. El CGH contestó con una consulta abierta en la que según declaró participaron medio millón de personas que votaron contra la propuesta del rector. En el interior del CGH triunfaron las corrientes llamadas “ultras” cuya base ideológica pareció menos clara que su resentimiento social y que un autoritarismo y voluntarismo profundos vinculados a agresiones verbales y físicas contra quienes no los seguían. Persuadidos de representar esencialmente los intereses de la base, muchos activistas “ultras” dejaron de consultar y atender a la base que se alejaba de ellos y que no se sentía representada por ellos. Su proyecto democrático se vino abajo. Los “moderados” del CGH también perdieron. Perdieron igualmente los simpatizantes de los partidos de izquierda y de los movimientos insurgentes como el EZLN que les pidieron aceptar los triunfos obtenidos y continuar la lucha en el seno del Congreso Universitario, una vez reabierta la Universidad.

Ya desde mediados de noviembre el subcomandante Marcos le había dicho a un grupo de paristas que habían ido a visitarlo: Yo los quiero un chingo a todos ustedes y siempre los vamos a apoyar hasta el fin, pero deben dejar de actuar con la vieja práctica política de no escuchar y de cerrarse al diálogo... deben permitir las opiniones divergentes y no reprimir a los estudiantes que opinan de diferente manera” (El Día, 24/1/2000). Todo fue inútil. El viejo modo de hacer política autoritaria prevaleció. Como haría ver más tarde Octavio Rodríguez Araujo: los activistas “exigieron que se les tomara en cuenta como si tuvieran la representación de estudiantes y académicos. Exigieron que se respetara su forma de organización no organizada. Ellos en cambio no respetaron otras formas de organización de estudiantes, académicos y administrativos. No quisieron darse cuenta que muchos universitarios que al principio simpatizaron con ellos ahora los repudiaban o ya no se sentían representados por ellos” (cf. Octavio Rodríguez Araujo. “Sumar y no restar”. La Jornada, 9/3/2000).

Siguió el paro. En la “opinión pública”, entre los televidentes y lectores de periódicos, universitarios y no universitarios, empezaron a cobrar autoridad creciente quienes clamaban por el uso de la “violencia legal”. El 1º de febrero hubo un enfrentamiento entre paristas y antiparistas en una escuela. El saldo fue de 37 heridos y 248 detenidos. El 4 de febrero se reunieron los paristas con el rector sin que llegaran a ningún acuerdo. Aquellas autoridades universitarias inclinadas a hacer respetar el estado de derecho por la fuerza pública y a acudir a las instancias legales correspondientes se volvieron mayoritarias y manifestaron su posición cada vez más abiertamente.

El 6 de febrero la fuerza pública tomó ciudad universitaria y otras instalaciones. La reanudación de clases se hizo con más de mil paristas presos, muchos de los cuales fueron poco a poco liberados. Frente a la rectoría se instalaron grupos de padres de familia que pidieron la libertad de sus hijos. Levantaron tres cruces, en las que cada día se crucificaban simbólicamente tres hombres o mujeres, en un acto de protesta profano y macabro. Varios manifestantes se sacaron sangre de las venas y con ella escribieron en las paredes: Libertad a nuestros hijos. Libertad a los estudiantes. Libertad a los presos políticos. En casi toda la universidad surgieron agresiones verbales y a veces físicas mientras seguían las movilizaciones políticas y las gestiones legales para la liberación de los presos.

La lucha por la explicación de lo ocurrido continuaría entre descalificaciones y legitimaciones contundentes, y bajo supuestos que en sí mismos son parte del enredo. Entre ellos anda la sospecha de que todo el paro fue planeado para demostrar la ingobernabilidad de la universidad, e iniciar la reforma neoliberal y privatizadora de la educación superior en México precisamente por el cordón más fuerte del sistema: la UNAM. Pero si esa sospecha es discutible, y si a ella fácilmente puede oponerse un estilo de actuar que corrige sus

políticas cuando los efectos no esperados son adversos, no cabe duda que a partir de algunos hechos se puede profundizar en el problema de la privatización del sistema educativo y en sus efectos buscados y no buscados. Así, no cabe duda que un diálogo en que la autoridad constantemente irrita y calma, intimida y atrae, casti-

**“Así, no cabe duda que un diálogo en que la autoridad constantemente irrita y calma, intimida y atrae, castiga y perdona a su opositor, es un diálogo en que la autoridad, o se reserva un final represivo, o provoca un final represivo o es víctima de un final represivo.”**

ga y perdona a su opositor, es un diálogo en que la autoridad, o se reserva un final represivo, o provoca un final represivo o es víctima de un final represivo. Pensar en un amplio diálogo universitario con estudiantes presos o indiciados pareció como abrir la puerta a un futuro ilusorio y en realidad inestable y autodestructivo de la universidad. De todos modos a poco de regresar a sus actividades (entre la liberación de la inmensa mayoría de los estudiantes presos, manifestaciones, paros, y nuevos motivos de conflicto como cuando en la Semana Santa el Rector pidió que la policía cuidara las instalaciones universitarias), en medio de hechos tan encontrados, el diálogo entre autoridades y huelguistas se reanudó, y por momentos pareció mostrar un trato más cortés en los participantes y ciertas posibilidades de acuerdos.

En cualquier caso, una inmensa tristeza acompañó la alegría de la reapertura de la universidad, con la conciencia de una seria amenaza a la Universidad Nacional mientras continúe el proyecto de privatización de la educación superior, un proyecto auspiciado por el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Asociación Patronal de la República Mexicana y altos funcionarios del gobierno de México, un gobierno éste que se encuentra por cier-

to, incluso a principios del siglo XXI, a la cabeza de la ortodoxia neoliberal. (cf. Pablo González Casanova. "Neoliberalismo y Universidad. Un análisis documentado". De próxima publicación). El peligro pareció confirmarse no sólo con el grave conflicto sino con tendencias cada vez más conocidas, como la disminución de recursos federales para la educación superior y los planes nacionales y mundiales para la privatización y comercialización de la enseñanza.

La información ocultada y negada sobre la creciente baja de subsidios gubernamentales a las universidades no impidió realizar cálculos reveladores. Si se analiza bien la información disponible se advierte la sistemática caída del subsidio federal a la educación superior. Como porcentaje del PIB, el subsidio pasó del módico 0.84% en 1994 al 0.54% en el año 2,000. Como parte del total del subsidio federal pasó de ser el 28% en 1987 a sólo el 15.00% en el 2,000. La caída del subsidio federal se refleja todavía más en los gastos por alumno en la educación superior: si en 1977 eran de \$ 20.560 en el 2000 sólo llegaban a 13.972, a pesos constantes de este último año. (Vid. José Gandarilla. "Sobre algunos cálculos del subsidio a la educación superior. Errores y omisiones". En preparación). País de jóvenes excluidos y empobrecidos, sólo unos cuantos que son excepción, van a universidades públicas y privadas, éstas necesariamente elitistas y aún más excluyentes, y aquellas seriamente afectadas y amenazadas en sus funciones e incluso en su sentido público y nacional.

Mucho de lo ocurrido se explica por una política de educación con pobreza, y por una política de educación para aceptar "disciplinado" el empobrecimiento de uno mismo y de los demás. Ya lo dijo Carlos Monsivais en su carta al Rector de la UNAM a raíz de la toma de ciudad universitaria por las fuerzas especiales: "Una recuperación punitiva no es, ciertamente, una devolución universitaria, y de eso se trató: de señalar la majestuosidad del poder, de darle una lección perdurable a los jóvenes, tan arrogantes y desafiantes..." Y más lejos añade: "Quiso ganar, y lo consiguió por un breve lapso, la derecha satisfecha de su pedagogía del escarmiento" (La Jornada, 10/2/2000).

Por su parte Sergio Zermeño en un artículo titulado "UNAM: vigilar y castigar" escribió: "Muchos universitarios nos hemos cansado de repetir que este no es el camino, que en realidad con el empleo ilegítimo del plebiscito y de los medios, se ha querido eludir el núcleo central de este movimiento que es, por enésima vez lo decimos: la lucha por un mejor subsidio a la educación superior para que sea posible de esa manera, elevar la calidad de la enseñanza y ampliar un poco la matrícula..." Y él mismo agrega: "Todo ello ha de acompañarse, por razones elementales de justicia social, con la gratuidad de todas las modalidades de la educación pública..." (La Jornada, 9/3/2000).

Si no se responde con hechos y palabras a esas dos demandas: el derecho expreso constitucional y real a la educación superior pública y gratuita, y mayores recursos para educar mejor a un mayor número de estudiantes, la solución de

fondo no se alcanzará y, por supuesto, si esos problemas se resuelven, será necesario plantear otros, como la democratización de las universidades que al mismo tiempo limite el autoritarismo y logre altos niveles académicos, y como la democratización del país que haga efectivo el camino a la justicia social y la paz; pero todos esos problemas exigen una base política, social, cultural y económica que el neoliberalismo se niega a forjar.

En cuanto a la búsqueda de una alternativa pensamos que se debe basar en los significados teóricos y prácticos del movimiento, y, con ellos, en la precisión de un proyecto de reforma universitaria que alcance grandes consensos en torno al derecho universal a la educación, que reestructure el sistema educativo a todos los niveles, combinando los métodos clásicos y electrónicos de la educación, y articulando una red de redes de instituciones públicas y privadas de investigación, enseñanza y difusión de las ciencias y las humanidades, de las artes y las técnicas, a fin de impartir, como es perfectamente posible en nuestro tiempo, mejor educación para más. (vid. Pablo González Casanova, "Educación para todos". La Vasiija, año 2, Vol. 2, No. 4, enero-abril de 1999, México, pp. 22-42). Ese proyecto implica también la democratización de la enseñanza universitaria y del país, y una redefinición de la democracia y del conocimiento como poder; del poder no sólo como estado y mercado, sino como estado y como sociedad, muy desigual, injusta e inequitativa, es decir, como estado y como sociedad que plantean la necesidad de una ética política basada en la fuerza de las organizaciones democráticas de estudiantes, profesores, trabajadores, pobladores urbanos y rurales, pueblos indígenas... Que esa redefinición entrañe luchas de la más variada intensidad y magnitud por la defensa y ampliación de los servicios públicos y los recursos nacionales -incluido el conocimiento y la educación superiores- es indudable. No se trata de problemas que en la correlación de fuerzas actual vayan a resolver los expertos. La contribución de los expertos podrá ser importante pero la solución más profunda sólo se dará con la construcción de las fuerzas sociales y políticas que en la Universidad y el país permitan alcanzar esos objetivos. Sin duda allí se encuentra el verdadero problema pedagógico.

## ■ Notas

\* Ex Rector y Catedrático de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. Desde 1948 no se había hecho ningún aumento significativo. Sólo en 1966 se había aprobado una cuota por exámenes extraordinarios.